

Las marchas de los cocaleros del departamento de Caquetá, Colombia: contradicciones políticas y obstáculos a la emancipación social¹

JUAN GUILLERMO FERRO²
GRACIELA URIBE³

Resumen

Esta ponencia sobre las marchas de los cultivadores de coca sucedidas en el departamento de Caquetá en 1996, pretende analizar un caso que muestra las dificultades de la emancipación social en el contexto colombiano de guerra irregular y de desarrollo de los cultivos ilícitos. El trabajo inicia con una contextualización del proceso de colonización campesina de la Amazonia colombiana con énfasis en las etapas de consolidación (1960-1980) y desestabilización (a partir de 1980). Este marco es el que permite entender los antecedentes de las marchas de los cocaleros en donde se identifican cuatro actores principales (los cultivadores, los narcotraficantes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno) con sus respectivos proyectos políticos. Las marchas son el acontecimiento que evidencia la actual debilidad del movimiento campesino caqueteño, y las dificultades de tener autonomía frente a las FARC en su lucha contra la política de erradicación de los cultivos de coca por parte del gobierno nacional. El fraccionamiento del poder político-militar en la región complejiza y dificulta las posibilidades de una emancipación social organizada y visible. La opción de los campesinos organizados ha sido más la de resistir cotidianamente sin enfrentamiento y sin proyecto visible a todos los actores dominantes.

Palabras clave: Cultivos ilícitos, movimiento social, marchas cocaleras, Caquetá, FARC, fumigaciones, Colombia, narcotráfico, colonización

- 1 Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, del 9 al 11 de julio del 2002, Salamanca-España y en el VI Congreso "La investigación en la Pontificia Universidad Javeriana", octubre 30-noviembre 2 de 2001.
- 2 Profesor-investigador de la Facultad de estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. E-mail: jgferro@javeriana.edu.co
- 3 Investigadora y consultora en Desarrollo Rural. E-mail: graciela.uribe@jol.net.co

Abstract

The analysis made in this paper about the coca growers' marches occurred in Caqueta in 1996, shows the difficulties of social emancipation in the Colombian context of war and illegal crops. The process of peasant colonization in the Colombian Amazon region is put into context, with special emphasis on the consolidation (1969-1980) and destabilization (from 1980 on) stages. This framework provides background information for coca growers' marches in which four main actors can be identified (coca growers, drug-traffickers, the Revolutionary Armed Forces of Colombia —farc— and the government), each of them having a political project in mind. Marches evidence the weakness of the Caquetá peasant movement and the difficulties to be independent from farc in the fight against the national government's policy of coca plantation eradication. The division of the political and military power in the region makes organized social emancipation even more difficult. The alternative organized peasants have is to resist daily, without confrontation and without having a feasible project, all dominant actors.

Key words: illegal crops, social movement, coca growers' marches, Caquetá, FARC, sprayings, Colombia, drug-trafficking, colonization.

Résumé

Cet exposé concernant les marches des cultivateurs de feuille de coca dans le département du Caquetá en 1996, prétend analyser un cas qui montre bien les difficultés de l'émancipation sociale dans le contexte colombien de guerre irrégulière et développement des cultures illicites. Le travail commence avec une mise en contexte du processus de colonisation paysanne de l'Amazonie colombienne surtout pour ce qui est des étapes de consolidation (1960-1980) et déstabilisation (à partir de 1980).

C'est dans ce cadre que l'on peut comprendre les antécédents des marches entreprises par les producteurs de coca où l'on identifie quatre principaux acteurs (les cultivateurs, les narcotrafiquants, les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (farc) et le gouvernement) avec ses propres projets politiques. Les marches mettent en évidence l'actuelle faiblesse du mouvement paysan du Caquetá et les difficultés pour avoir une autonomie face aux farc dans leur lutte contre la politique d'éradication des cultures de coca de la part du gouvernement national. Le fractionnement du pouvoir politico-militaire dans la région rend plus complexe une émancipation sociale organisée et visible. L'option des paysans organisés a été celle de résister de manière quotidienne sans un affrontement et sans un projet visible à tous les acteurs dominants.

Mots clés: culture illégale, mouvement social, marches des producteurs de coca, Caquetá, farc, fumigations, Colombie, trafic de drogue, colonisation.

I. Antecedentes y dinámica de la colonización en el Caquetá

Para una mejor comprensión de la marcha de cultivadores de coca de 1996 en el departamento del Caquetá⁴, debemos ubicarnos en la dinámica de la colonización reciente de esta región amazónica que explica el porqué de la migración campesina desde el interior, en sus diferentes momentos.

Los orígenes de la colonización caqueteña obedecen tanto a las economías de tipo extractivista de caucho, madera y pieles, como a la dinámica de la concentración de tierras en la región andina. Éstos se remontan al siglo XIX (1880) cuando las compañías explotadoras del caucho y la quina se establecieron en diferentes lugares de la Amazonia colombiana con la finalidad de extraer y comercializar el látex⁵. El proceso colonizador en esta región del país, se inicia con algunas de las personas que llegaron atraídas por estas explotaciones. Sin embargo, es a raíz del conflicto colombo - peruano, por la definición de límites entre los dos países (1932)⁶, cuando se construye la vía que comunica Florencia (capital del departamento del Caquetá) con el Huila en 1936, y más adelante, al estallar la violencia a raíz de la muerte del caudillo liberal, JORGE ELIÉCER GAITÁN (1948), que se dan las migraciones masivas desde el interior del país. El gobierno impulsa proyectos de colonización dirigida (Ley 20/59) y de apoyo a la colonización espontánea a través del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, con el fin de asentar las

4 El departamento del Caquetá está ubicado en el suroriente del país y es la puerta de entrada a la Amazonia colombiana, tiene una extensión de 88.965 km, poblado en sus orígenes por grupos indígenas pertenecientes a las etnias coreguage, wuitota, ingana, andakí, que hoy constituyen el 2% del total de la población actual, estimada en 298.760 habitantes. El Caquetá fue elevado a la categoría de departamento en 1981.

5 La Casa Arana, que tuvo su origen el Perú a finales del siglo XIX, ejerció el monopolio de la explotación del caucho en Perú, Brasil, Colombia y Venezuela. A partir de 1884, se establecen en el Caquetá las compañías colombianas explotadoras de caucho, Cano y Cuello y la Concesión Perdomo.

6 La ambición por la explotación del caucho de la Casa Arana la lleva a invadir el territorio amazónico, generando continuos litigios entre Colombia y Perú. Éstos tienen su desenlace durante el gobierno del presidente OLAYA HERRERA, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra del 25 de mayo de 1933, ante la Liga de las Naciones por representantes de las dos naciones.

familias desalojadas por la violencia en los departamentos del Caquetá, Meta y Arauca (URIBE, 1998; INCORA, 1973) a través de una línea de créditos, capacitación y titulación de baldíos, dentro de una política que obedecía más al criterio de no modificar la estructura de tenencia de la tierra en el interior de la frontera, que a favorecer al campesinado. El mayor auge migratorio se dio hasta 1975.

Durante esta etapa (1960 - 1980), podríamos decir que el Caquetá adquiere una fisonomía propia, fundamentalmente en las regiones de mayor concentración de población: se abren las principales vías de penetración, se organizan las veredas y las juntas de acción comunal, se organizan las fincas, se fundan pueblos, se construyen iglesias, colegios, escuelas y se inicia una relativa estabilidad económica basada fundamentalmente en la ganadería. Todo esto es posible gracias al espíritu comunitario que se desarrolla alrededor de la construcción de región, desde las organizaciones más simples de ayuda mutua en la construcción de los ranchos, la tumba de montaña, la apertura de caminos, hasta las juntas de acción comunal, cooperativas, asociaciones y grupos comunitarios de producción y mercadeo. El campesino que se ha hecho colono adquiere identidad como tal, con un sentido de pertenencia a esta tierra que la siente propia, gracias a su esfuerzo de transformar la selva en tierra habitable.

En esta época la organización campesina en el nivel nacional vive uno de sus mejores momentos. A través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos⁷, ANUC, los campesinos bajo la consigna de “Tierra para el que la trabaja”, logran importantes conquistas en recuperación de tierras. En el Caquetá, la ANUC alcanza una de las organizaciones más fuertes. Durante 1972-1979, se dan las más grandes movilizaciones campesinas en el departamento, exigiendo al Estado el cumplimiento de los proyectos de apoyo a la colonización. En esta parte del país la lucha no es por tierra, sino por créditos, vías de penetración, educación, salud y mejores precios para las cosechas. A las movilizaciones campesinas, se unen las del magisterio, las de los empleados del Estado y las de la ciudadanía en general por servicios públicos básicos (luz, agua, vías, etc.). De sus movilizaciones obtienen la condonación de deudas, la adjudicación de baldíos y el cambio de promotores de juntas de acción comunal. De igual manera, hay que reconocer el importante papel que desempeñó la iglesia católica en la defensa de los intereses del campesinado y el apoyo a las diferentes organizaciones populares que surgieron en la época. Sin duda durante esta etapa, hay una conciencia colectiva de lucha por reivindicaciones básicas y por

7 La ANUC es creada por el gobierno del presidente CARLOS LLERAS RESTREPO como apoyo a la Reforma Agraria, Decreto 755 del 2 de mayo de 1967. En el primer Congreso celebrado en 1970 se divide en la línea Sincelejo, que se independiza del gobierno y la línea Armenia, que sigue sus directrices. En 1974 durante el Tercer Congreso se evidencian las contradicciones entre las diferentes tendencias de izquierda que se disputaban la dirección del Movimiento. Véase ESCOBAR, CRISTINA, *Trayectoria de la ANUC*, CINEP, Colección Agraria, 1982.

su reconocimiento del carácter de ciudadanos como pobladores de las hasta ahora llamadas zonas de frontera del país, que buscan ser incorporadas al desarrollo nacional.

A partir de 1980 se dan varios hechos, que vistos en su conjunto producen lo que podríamos llamar, la desestabilización tanto del proceso colonizador como del movimiento popular. De un lado, el proyecto de apoyo a la colonización se limita únicamente a la titulación de baldíos. El campesino-colono, sin la posibilidad de acceder a nuevos créditos, en muchos casos agobiado por los mismos, se vio obligado a vender su parcela, generando de esta manera un doble problema: la apertura de nuevos frentes de colonización cada vez más distantes y con menos posibilidades de acceso y el avance del latifundio, reproduciendo de esta manera las mismas formas de concentración de la tierra del interior del país.

De otro lado, el debate interno entre las diferentes tendencias ideológicas de la izquierda, termina por debilitar y fraccionar al movimiento campesino. Una vez se disuelve la ANUC, el movimiento no se recupera y queda el campo abierto para las organizaciones armadas. Las bases se dispersan ante la división de los líderes y se abre el paso a la expansión y fortalecimiento de las organizaciones político-militares (FARC; M-19; EPL) que despliegan su actividad en las zonas donde el proceso de colonización de alguna manera se había ido consolidando. Las organizaciones armadas encuentran, entonces, un espacio que favorece su presencia. La frustración por las divisiones políticas internas de la ANUC y el olvido a las bases campesinas que le habían dado su apoyo, vuelven al campesino escéptico y proclive a apoyar la insurgencia armada ante la ausencia de organizaciones gremiales que canalicen el descontento de la ciudadanía.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, aunque son un movimiento con más raíces en el norte del departamento, para esta época mantienen un bajo perfil en la región y su expansión se va a dar es a partir de la Séptima Conferencia (1983). Sin embargo, el Movimiento 19 de abril, M-19, desarrolla una acelerada actividad político-militar durante 1979-1983 en el centro y sur del departamento que va a culminar con una dura confrontación armada que provoca una de las más grandes migraciones dentro y fuera del Caquetá. El M-19, abandona a su suerte a los colonos y posteriormente se amnistía y organiza como movimiento político (URIBE, 1998).

Al finalizar la década del ochenta nos encontramos con una nueva realidad, la disolución de las organizaciones campesinas, la ausencia de organizaciones gremiales y el debilitamiento de las organizaciones sindicales. La inestabilidad, inseguridad y desconfianza, constituyen ahora el nuevo equipaje del colono.

Las causas que originaron este nuevo escenario las podemos encontrar en las contradicciones internas de la izquierda, en el tratamiento de fuerza dado por el

Estado a las reivindicaciones sociales y en las equivocaciones políticas y militares de las organizaciones armadas, en este caso, del M-19.

Al respecto REYNEL PULECIO argumenta:

Desde finales de los años setenta, las diferentes expresiones regionales del régimen político dominante privilegiaron el tratamiento de fuerza, de represión militar y de exclusión política a los conflictos sociales, antes que las salidas democráticas y de construcción de consensos. Este tratamiento del conflicto social condujo en simultáneo a dos procesos: i) al debilitamiento y en algunos casos desaparición, de las diferentes instancias de solidaridad social construidas históricamente en la Amazonia, vale decir, de las diferentes expresiones de la sociedad civil actuantes durante el período de colonización productiva; y ii) a la creación de un espacio propicio para el fortalecimiento de diferentes expresiones políticas insurgentes, como ocurrió con el M-19, el EPL y las FARC-EP⁸.

Los partidos tradicionales liberal y conservador a su vez, también se han disputado el territorio, siendo el partido liberal con la familia TURBAY COTE la que ha dominado mayoritariamente con un estilo clientelista. El Partido Comunista y el Movimiento Unión Patriótica apoyado por este partido, tuvieron así mismo, influencia en el norte del departamento, por su alianza con las FARC. El asesinato masivo de gran número de los miembros de la Unión Patriótica debilitó este movimiento en los niveles nacional y regional.

Posteriormente, el cultivo de la hoja de coca para uso comercial, que se inicia en el Caquetá a mediados de la década del setenta, abre un nuevo ciclo en el proceso colonizador (1980-2000). Atraídos por un cultivo permanente que garantiza su comercialización e ingresos en plazos de cuarenta y cinco días, llegan al departamento miles de personas provenientes de diferentes partes del país con el objetivo de obtener un beneficio económico. La dinámica del proceso colonizador, afectada por el fracaso del proyecto impulsado a través del INCORA, con la decadencia del movimiento popular y la llegada masiva de nuevos “colonizadores”, sufre una transformación y desestabilización, no sólo económica, sino social, cultural y política, por los efectos que produce una economía ilícita, basada en reglas de juego por fuera de la legalidad que terminan por imponerse. Nuevos frentes de colonización se abren en el departamento, esta vez, motivados por la expansión de los cultivos de coca.

El protagonismo del colono se empieza a desdibujar con la llegada de nuevos actores sociales de diferentes regiones del país, unos con el interés de invertir en la

8 PULECIO, JORGE REINEL y PULECIO HERMINSO., “Proyecto andino de desarrollo territorial amazónico”. Segundo informe de Avance, Bogotá, Fundación Friedrich Ebert de Colombia, FESCOL, 1999.

siembra, procesamiento y comercio del alcaloide a grande escala, otros, en busca de trabajo como raspadores, químicos, cocineras y pequeños comerciantes. Se crea una nueva mentalidad que gira alrededor de la coca, la cual empieza a competir con valores como el apego a la tierra, a la organización, al trabajo comunitario y a la familia.

Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que el Caquetá es un departamento habitado por desplazados en continuo éxodo. La itinerancia ha llegado a formar parte de la vida del caqueteño, nacido o adoptado. Al desplazamiento, generado por los acontecimientos señalados anteriormente, hay que añadir el propio de las dinámicas de transformación social que allí se viven, tanto por lo que significa el avance de la colonización con sus olas migratorias hacia las zonas de frontera, como al provocado más recientemente por la movilidad de los cultivos de coca. Este marco, le da al departamento la particularidad de tener una población mayoritaria desarraigada, con disponibilidad a dejar lo que ha logrado conseguir en ciclos más o menos cortos de tiempo y a enfrentarse a situaciones de riesgo.

El tipo de persona que tenemos ahora, es el resultado de esta historia de éxodo, de violencia, de sufrimientos y de riesgo. Estos hechos sumados, confirman el ciclo Migración - Colonización - Conflicto - Migración, característico de las zonas de colonización (FAJARDO, 1994), a través del cual se reproducen no sólo las estructuras agrarias excluyentes y las contradicciones inherentes a éstas, sino los conflictos sociales y culturales.

Coincide esta etapa con la expansión y crecimiento de las FARC en el país y en particular en el Caquetá. La dinámica del conflicto armado adquiere dimensiones que tienden a ser cada vez más conflictivas, con efectos muy serios sobre la migración, las organizaciones sociales y la economía del departamento.

Si bien durante la época en la que se consolida la colonización, los colonos buscan su incorporación en la sociedad a través de las movilizaciones campesinas regionales en las cuales demandan los servicios básicos del gobierno, en otro momento, comparten con la insurgencia el objetivo de derrocar al Estado ante el incumplimiento de sus promesas. Vivida la experiencia acumulada de la violencia que los desalojó de sus lugares de origen, de la nueva guerra por las acciones de los alzados en armas y el abandono por parte de los líderes tanto de las organizaciones gremiales como de los grupos insurgentes, nos atrevemos a lanzar la hipótesis de que los campesinos con tradición organizativa y que desean mantener su autonomía, en los últimos años se han venido refugiando y protegiendo en defensa de su propia supervivencia, “haciéndole el juego” a las organizaciones políticas y armadas en beneficio de sus intereses.

En este contexto se ubican las llamadas marchas cocaleras de 1996, objeto de este artículo, motivadas inicialmente por la política de fumigaciones a los cultivos

de coca por parte del Estado colombiano. Estas marchas, que tuvieron una duración de cuarenta y cinco días, marcan otra etapa significativa en la historia al lograr, en otras, se dio más improvisación, la organización y los liderazgos surgieron en la medida que se avanzaba hacia la capital del departamento. Allí, se buscaría dialogar con el gobierno nacional para detener las fumigaciones y negociar la sustitución de los cultivos de coca.

Desde el principio, las posiciones entre el gobierno y los representantes de los cultivadores son opuestas. Para el gobierno, la erradicación y fumigación de los cultivos es innegociable y los cultivadores son considerados narcotraficantes. Los campesinos de su parte, vienen a negociar la sustitución, no como narcotraficantes, sino como cultivadores. El gobierno habla de erradicación total y definitiva sin sustitución. Los campesinos dicen que para erradicar, es necesario sustituir.

Si bien, sin la iniciativa de las FARC la movilización de cultivadores no se hubiera dado, es evidente que en todos sus participantes, había un claro rechazo a las políticas de fuerza del Estado. Podemos hacer muchas lecturas de las marchas cocaleras, la nuestra busca aportar al análisis de esta movilización, identificando los diferentes proyectos que había detrás de los actores que en ellas participaron y la complejidad de relaciones que se establecen en cada uno de ellos. Visto de esta manera, pretendemos encontrar algunos elementos que nos permitan comprender la complejidad de movimientos sociales en el contexto de los cultivos ilícitos, las organizaciones insurgentes y la población civil, y su dificultad para alcanzar algún grado de emancipación.

II. Los proyectos

En las marchas participan una diversidad de actores con diferentes procesos y proyectos. No podemos, entonces, considerar el papel de los diferentes actores que participan en ellas, independientemente de los procesos que históricamente han vivido y de los diferentes intereses y proyectos que defienden.

A continuación definimos los principales proyectos sociopolíticos que están detrás de los actores que intervienen en las marchas cocaleras:

La **ciudadanía**: es el proyecto de la *sociedad civil rural organizada* que existe en el Caquetá. Pretende, desde una posición crítica y autónoma frente al Estado, profundizar la democracia y darle contenido social a la economía rural.

La **no-ciudadanía**: es el proyecto de la *clase dirigente nacional*, que estaría definido por la carencia de programas y proyectos gubernamentales y de voluntad política que permitan la inclusión ciudadana⁹, el acceso a oportunidades sociales básicas y el desarrollo rural de la gran mayoría de los pobladores del Caquetá.

La **“desciudadanía”**: Es básicamente el proyecto de los *narcotraficantes*, definido por la defensa de la ilegalidad de la producción y comercialización de cocaína, lo cual, en la práctica, significa privar de sus derechos ciudadanos a la población productora.

La **“alterciudadanía”**: es el proyecto político de las *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC*, que pretende involucrar a la población como ciudadanos de un nuevo Estado, regido por esta organización.

Los anteriores proyectos serán desarrollados en la medida en que analicemos el papel de cada uno de estos actores a continuación.

III. Los actores

Los campesinos colonos y la población flotante

La diversidad de actores del nuevo escenario de la colonización que se hicieron presentes durante las marchas de cultivadores de coca —campesinos colonos, comerciantes, cultivadores, raspachines, vendedores ambulantes, indígenas, compradores de coca, entre otros—, nos muestra la complejidad del problema y al mismo tiempo nos permite entender que no podemos hacer una lectura lineal de su forma de participación. Es importante, así mismo, hacer claridad sobre el hecho de que el porcentaje minoritario estaba representado por los campesinos colonos con arraigo en el departamento y con una tradición organizativa. En tanto que los llamados “raspachines”, integrados por jóvenes de muchas regiones del país, sin tradición organizativa y más acostumbrados a la itinerancia, constituían más del 50% de los marchistas.

La sociedad civil campesina organizada, minoritaria dentro del grupo de marchistas, defiende un proyecto político, que se podría sintetizar como el de la búsqueda de la *ciudadanía*, la cual estaría definida por la incorporación activa

9 Esto pese a que en la Constitución vigente de Colombia se establecen con claridad los lineamientos de la participación ciudadana.

al Estado y a la sociedad civil nacional. Es decir, la vigencia de sus derechos sociales y políticos. En concreto, es el proyecto de algunas pocas organizaciones campesinas del Caquetá, ONG, y de líderes naturales con experiencia organizativa.

Entre el grupo minoritario con tradición organizativa, se han generado algunas organizaciones que han logrado mantenerse y consolidarse en algunas regiones del departamento. No obstante, tales grupos no asumen un papel protagónico durante las marchas. La razón la podemos encontrar en que estas organizaciones no alcanzan a tener un impacto regional. Además, la movilización masiva de los cultivadores, al estar impulsada por un actor armado, las hacía más vulnerables frente a este actor y con poca capacidad de intervención. Su participación, en últimas, se reduce a un apoyo de carácter humanitario a los marchistas y de crítica a la política de intervención del Estado y a la forma como las FARC impulsan las marchas. Estas organizaciones no salen a las marchas reivindicando su razón social e identificándose frente a la protesta, ni llegan a la mesa de negociación como tales. En la mesa, la representación de los marchistas es por zonas geográficas. Los únicos con representación social son los “raspachines” y los indígenas. Los primeros, no porque exista una organización que los convoque, sino por su carácter y fuerte presencia durante las marchas. Los indígenas sí tienen representantes de sus propias organizaciones en la mesa de negociación¹⁰.

La posición y la participación de los campesinos colonos en la marcha, varía entonces de acuerdo a la experiencia y al nivel de organización que éstos posean. Es decir, entre más hayan estado vinculados a experiencias organizativas (grupos asociativos, movimientos populares, grupos de economía solidaria, etc.) más críticos son del proceso. Los colonos pertenecientes a organizaciones campesinas o con una tradición de arraigo en el Caquetá, conociendo la orden de marchar por parte de las FARC, asumen una posición crítica frente a este mandato, en la medida en que consideran que esta movilización responde a una imposición del grupo armado. Lo que no quiere decir que ellos no compartieran el rechazo a la fumigación de los cultivos. En estas condiciones, los campesinos se unieron a la marcha por etapas, ante las consecuencias que podría tener un abierto desacato. Podríamos decir que su posición crítica está basada en la oposición a la metodología utilizada por el movimiento armado, y a un cierto desconocimiento de los verdaderos intereses político-militares de éste. En cuanto a la metodología, hubo críticas a la forma arbitraria como se impusieron los líderes; a la falta de autonomía de los mismos para negociar (dadas las interferencias del grupo armado); al manejo

10 El CRIOM es el Consejo Regional Indígena del Orteguaza Medio y representa a la comunidad indígena korebaju del Caquetá. Los indígenas inganos a su vez, tienen una representación a través de sus cabildos de la Baja Bota Caucana.

impositivo en el recaudo de las contribuciones para la financiación de la marcha; a la improvisación en la elaboración del pliego de peticiones para negociar con la comisión del gobierno; y a la falta de previsión frente a los problemas logísticos de una manifestación de esta magnitud.

Los cultivadores y recolectores de hoja de coca no vinculados a procesos organizativos, participan por temor a las consecuencias de desobedecer una orden impartida por la guerrilla y por su rechazo natural a las fumigaciones. Sus críticas a las marchas son más “visceralas” (por el sufrimiento de la experiencia vivida), que fruto de un análisis de la complejidad de la situación. El caso de los recolectores de hoja de coca, los llamados “raspachines”, es particular por el número de participantes; porque representan al grueso de la población flotante vinculada a los cultivos de coca y por su actitud combativa y anárquica. El “raspachín”, es producto del proceso de descomposición social y económica del sector rural en Colombia. Incluso para la guerrilla misma, fue difícil el control de los “raspachines”, por las características socioculturales que definen este actor: juventud, nomadismo, desarraigo familiar y social, ausencia de oportunidades laborales y de estudio, entre otras (FERRO y otros, 1999).

Es en estas marchas que el apelativo “raspachín”, dado al recolector de hoja de coca adquiere estatus. De un lado, este trabajo empieza a ser reconocido como un oficio especializado y de otro, la persona que lo realiza es considerada sujeto de derechos en el momento de la negociación.

Los narcotraficantes

En la década de los años ochenta en el Caquetá, los narcotraficantes tenían un gran poder económico, en un contexto de desorden social y violencia común, con ausencia de una autoridad que se impusiera en la región. La presencia del ejército en esta época, es más de complicidad con el narcotráfico que de control social. Es para finales de estos años que el narcotráfico va a encontrar en la guerrilla (FARC) un actor que le impone unas reglas de juego a las cuales se ve forzado a someterse¹¹. Este actor actualmente tiene una posición en la región de subordinación a la fuerza y poder de la guerrilla. Su relación con la guerrilla es pragmática, en cuanto le facilita unas condiciones de seguridad para el negocio.

11 La presencia de los carteles del narcotráfico en la región obedece tanto a las exigencias del mercado internacional, como a las relaciones de éstos con el movimiento armado. El cartel de Cali y el cartel de Medellín (principales carteles de narcotráfico en Colombia en los ochenta y parte de los noventa), han tenido diferentes formas de relación con el movimiento armado: mientras no se conocen enfrentamientos abiertos entre el cartel de Cali y las FARC, éstos sí se dieron con el cartel de Medellín.

En esta medida, el proyecto de los narcotraficantes es el que hemos denominado “desciudadanía”, porque su mundo es el de la ilegalidad. Su interés es que se mantenga la ilegalidad de la economía de la coca, porque ésta es la que hace que dicha economía sea rentable. El narcotraficante es un delincuente común y no un delincuente político, lo que busca no es cambiar las reglas de juego, sino hacerles trampa (OROZCO, 1990). A los narcotraficantes, no les interesa el problema de la incorporación ciudadana de los campesinos coccaleros, tampoco el desarrollo rural en la región, ni la transformación revolucionaria del sistema. Asimismo, la ausencia del Estado no constituye para ellos motivo de preocupación.

El papel de los narcotraficantes en las marchas es el de contribuyentes a su financiación. Es el mismo que desempeñan los dueños de fincas, comerciantes, pequeños y grandes cultivadores y transportadores, aunque por su capacidad económica su aporte es mayor.

Un pequeño comerciante de coca opina respecto a la participación de los narcotraficantes en las marchas:

Que el narco sostuvo la marcha, eso es mentira. Le tocó por obligación, esa marcha la ideó directamente la guerrilla, ellos fueron los gestores, fueron los que hicieron todo. A uno por tener su finca, por ser de tal parte, tenía que llevar remesas. La “gente” (*guerrilla*) llega y dice: se necesita que dé 30 estufas, al otro le dicen: se necesita que dé 30 pares de botas, se necesita que dé una o dos vacas. Pero que el narco haya sostenido el paro, no. Por decir algo, económicamente no, le tocó por obligación, por fuerza. Nosotros compartíamos la protesta contra la fumigación, lógico, eso sí. Porque desde que no haya producción, no hay compra, no hay nada. Entonces eso se comparte, porque estamos nosotros en una región coquera, en un pueblo coquero, donde el sustento del Caquetá es a base de eso. Incluso a nivel nacional¹².

Teniendo en cuenta que una gran parte de los comerciantes de coca en el Caquetá también son cultivadores, es claro que a éstos las fumigaciones los afectaban en su doble papel, por cuanto significaba no sólo la pérdida de una inversión en los cultivos, sino también la necesidad de recomponer el mercado.

Ahora, dada su condición de ilegalidad este actor no desempeñó un papel visible durante las marchas y mantuvo una actitud expectante. Los narcotraficantes se opusieron a la fumigación y en eso coincidían con los cultivadores y con la guerrilla. Pero también es claro, que el proyecto de sustitución voluntaria de cultivos presentado por los marchistas, afectaba sus intereses por la obvia reduc-

12 Entrevista a un productor y comerciante de coca. Archivo Entrevistas, Proyecto IER - COLCIENCIAS, 1999.

ción de la oferta de pasta de coca, diferenciándose así de las reivindicaciones de los pequeños cultivadores¹³ y de los objetivos del programa PLANTE¹⁴.

Con la guerrilla hay una coincidencia en cuanto al propósito de desmilitarización de la zona, aunque por razones diferentes. Para los narcotraficantes ello implicaría mayor libertad de movimiento para su negocio. Lo que es táctico para la guerrilla¹⁵, es estratégico para el narcotráfico. El riesgo para los narcotraficantes en el largo plazo, sería la consolidación del poder político de la guerrilla pues esto representaría una amenaza para la economía ilícita, por cuanto las FARC abogan por la legalización del consumo de drogas¹⁶.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—

La presencia de las FARC en el Caquetá está ligada al proceso colonizador y al desarrollo de los cultivos de coca. Esto ha significado por un lado, un vínculo estrecho con la población colona y flotante del departamento en los últimos treinta años. Esa relación social unida a los recursos provenientes de los impuestos a la comercialización de la coca y al desarrollo de su fuerza militar, ha permitido un progresivo control del territorio. Si bien anteriormente las FARC impulsaron marchas campesinas en el norte del departamento, éstas no estaban directamente relacionadas con la problemática de los cultivos de coca.

Las formas de intervención de las FARC con relación a la economía de la coca han variado con el tiempo¹⁷. Inicialmente (finales de los años setenta) las FARC se opusieron a la instalación de los cultivos pero fueron desbordadas por la situación económica de los colonos. Posteriormente las FARC desarrollan procesos de regulación de la expansión de la producción de hoja de coca, con la instrucción de no abandonar los cultivos de “pan coger”¹⁸. En la medida que esta economía se

13 Véase documento: “Pliego de peticiones de la marcha campesina, indígena y comunal del Caquetá, presentado al gobierno nacional y regional para negociar la suspensión de la presente marcha”, agosto de 1996, Florencia, Caquetá.

14 El PLANTE es la entidad que desarrolla el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo en Colombia desde 1995, adscrito a la Presidencia de la República. Su finalidad es la de reducir la participación de la población en los cultivos ilícitos mediante acciones de desarrollo rural.

15 Entendiendo que lo estratégico para las FARC es la toma del poder.

16 Ver documento: “legalizar el consumo de la droga: única alternativa seria para eliminar el narcotráfico”. Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP Montañas de Colombia, marzo 29 del año 2000.

17 Para un mayor desarrollo de estas formas de intervención, véase: GRACIELA URIBE y JUAN GUILLERMO FERRO, “Las FARC: organización, política y región”. Informe final de investigación. COLCIENCIAS – Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, diciembre de 1999.

18 Los cultivos de “pan coger” son aquellos que suplen buena parte del autoconsumo alimentario de los campesinos.

consolida en la región, las FARC se convierten en recaudadores de impuestos a la comercialización de la pasta de coca. Más recientemente, las FARC han intervenido en la regulación de los precios y en el control de los compradores.

Por otro lado, en 1985 y desde 1999, las FARC han hecho propuestas de sustitución de cultivos en el marco de los procesos de negociación con los gobiernos de BELISARIO BETANCUR (1982-1986) y de ANDRÉS PASTRANA (iniciado en 1998).

Las formas de intervención de las FARC en la economía de la coca¹⁹

Años	Formas de intervención
1977	Inicio de los cultivos de coca en el Caguán.
1978-1979	Oposición inicial y posterior aceptación de la siembra de los cultivos de coca. Creación de las “autodefensas”.
1979-1999	Regulación de los cultivos de coca. Exigencia de cultivos de pan coger.
1982-1998	Cobro de impuestos a los comerciantes de pasta, a los laboratorios de producción de cocaína y a los vuelos de carga.
1985	Primera propuesta de sustitución incluida en el plan de desarrollo para el Caguán entre las FARC, el Estado y las comunidades.
1986-1991	Concesión de mayor importancia a las actividades económica y militar que a las esferas organizativa y política.
1991-1992	Regulación policiva del comportamiento de los narcotraficantes y miembros de las “cocinas” en el Caguán.
1995-1996	Organización de las marchas de los cocaleros contra la fumigación y contra la presencia del ejército.
1998-1999	Establecimiento de precios de sustentación. Eliminación de los comerciantes y comercialización de la pasta por parte de las propias FARC. Inicio de la competencia por la compra de parte de los paramilitares.
1999	Segunda propuesta de sustitución de cultivos por parte de las FARC para llevar a cabo en Cartagena del Chairá.

Sobre el papel de las FARC durante las marchas un líder comunitario de Cartagena del Chairá opina:

En ese momento le decían a la gente que la marcha se iba a dar por las fumigaciones. Pero más que todo por la presencia del ejército, porque lo de las

¹⁹ Intervención que se inicia en el Caguán y que posteriormente se generaliza en todo el departamento del Caquetá.

fumigaciones no fue tanto. Incluso la guerrilla decía que tenían que desalojar Remolino, y así el ejército no tendría ningún objeto para estar allí, porque no había población civil. El ejército debe estar donde hay población civil, y donde no hay población civil pues no tienen nada que hacer. De todas maneras eso fue presionado así, “tienen que irse y hacer invasiones”²⁰.

Desde otra posición, pero coincidiendo con relación al rol de la guerrilla en las marchas, dice un pequeño comerciante y cultivador de coca:

Yo creo, que el interés primordial era hacerle ver al gobierno, que ellos (la guerrilla) sí pueden. Que ellos son las fuerzas armadas, como ellos mismos se autodenominan, que pueden poner al país en jaque y demostrarle al ejército que lo que se “dice se hace”, y segundo, proteger en algo al campesinado, porque de todas formas, con la no fumigación el campesino se ayuda mucho, pues no se va a acabar, ¿cierto que sí? Pues desde que haya coquita hay plata, hay para todo. Pero que ellos hayan hecho el paro, única y exclusivamente para favorecer al campesino, no lo creo, por mi forma de pensar no lo creo, ellos tenían dos objetivos: uno demostrarle al gobierno, a la opinión pública nacional e internacional, que el que tiene las armas puede y manda; y segundo sí, favorecer 30%, 40% al campesinado²¹.

En este sentido nos apartamos del análisis de MARÍA CLEMENCIA RAMÍREZ cuando al referirse al papel de las FARC en las marchas cocaleras del Putumayo afirma: “Se hace evidente que las FARC apoya los paros cívicos para exigir al Estado el cumplimiento de sus funciones. Por consiguiente, no es tan claro que estén en contra de la inversión y presencia del Estado en la región amazónica” (RAMÍREZ, 2000). El proyecto político-militar de las FARC de sustitución del Estado es un proceso de largo plazo que pasa por apoyar las reivindicaciones de los campesinos frente al Estado para ganar el respaldo político de los pobladores de la Amazonia:

Lo que nosotros estamos reclamando es que no sólo a la gente se le den cosas, sino que le den poder, que al pueblo le den poder, y nosotros somos pueblo y en ese nuevo poder tiene que contar el pueblo y nosotros hacemos parte de ese pueblo. Por eso el camarada Manuel habla de que nosotros hacemos parte de la población civil, aunque suene como a contradicción. Nosotros somos población que ha optado por las armas porque se le cerraron las otras vías, porque sino qué somos. En la medida en que ya oficialmente alguien diga que las FARC son una fuerza beligerante, un Estado en potencia, ya empezamos a dejar de ser población civil, porque fuerza beligerante es como un Estado en potencia, entonces ya empezamos a dejar de ser

20 Entrevista a líder comunitario de Cartagena del Chairá, Caquetá. Archivo Entrevistas, Proyecto IER - COLCIENCIAS, 1999.

21 Entrevista a un comerciante y cultivador de hoja de coca en el Caquetá. Archivo Entrevistas, Proyecto IER - COLCIENCIAS, 1999.

población civil ¿En este momento qué somos? Un sector de la población civil que se alzó en armas contra el Estado²².

Desde el Programa Agrario de los Guerrilleros está muy definido el concepto de la toma del poder, porque hay un llamamiento general al proletariado, al campesinado, a los sectores medios de la sociedad colombiana, a la burguesía nacionalista y a algunos sectores de las fuerzas militares, a la lucha armada. Y se dice ahí, que esa es la única vía que nos han dejado, porque la otra, la lucha política, la de los cambios profundos a través del diálogo y a través del entendimiento, ha sido cerrada. Allí queda muy claro que se trata de una gran alianza en donde se van a ver luchas contra la oligarquía, los grandes mandos militares y los Estados Unidos, al lograr derrotarlos se va a asumir el poder, y esto es importante, porque ya es claro el concepto de que la solución está en el poder²³.

En las acciones de las FARC hay una gradualidad que dependiendo de la correlación de fuerzas políticas y militares. Empieza con la fiscalización de la gestión de las administraciones municipales regidas por los partidos tradicionales, pasa por la imposición de sus propuestas políticas a esas mismas administraciones, sigue con la ubicación de mandatarios locales miembros de su movimiento político revolucionario como puede ser el caso del municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) y otros municipios del país, hasta lograr hoy el despeje militar de 42.000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano²⁴. Adicionalmente, las FARC han hecho una propuesta de sustitución de cultivos ilícitos para este último municipio, donde queda clara la intención de la sustitución del Estado, puesto que la exigencia es el despeje militar y la administración del proceso por parte del grupo guerrillero sin intervención estatal y con recursos financieros de la comunidad internacional. En algunas regiones de la Amazonia, las FARC han prohibido la presencia del programa PLANTE encargado del desarrollo alternativo en zonas de cultivos ilícitos y en varias inspecciones de policía ya no hay inspector por orden de la guerrilla, eliminando de esta manera la única presencia estatal en muchas zonas rurales de estas regiones. Es en este proceso gradual de toma del poder, que las FARC promueven la descentralización, la participación ciudadana, los paros cívicos y marchas como las que estamos analizando, pero están lejos de querer quedarse ahí, pues si así lo hicieran no se distinguirían de cualquiera de las ONG de la región. En este caso el análisis no puede confundir los medios con los fines políticos.

22 Entrevista al comandante FERNANDO CAICEDO miembro de la Comisión Política de las FARC.

23 Entrevista al comandante SIMÓN TRINIDAD miembro de la comisión nacional de negociación en representación de las FARC.

24 El despeje militar de cinco municipios fue declarado el 7 de enero de 1999 con el propósito de facilitar los diálogos entre las FARC y el gobierno del presidente ANDRÉS PASTRANA.

Las FARC aceptan el papel central que desarrollaron tanto en la preparación como en el desarrollo de las marchas. Sin embargo, si en algún momento el objetivo era rechazar el avance de la acción del ejército (a través de la llamada “Operación Conquista”), esto no se inicia con la movilización social sino con los enfrentamientos posteriores estrictamente militares, y en particular con el combate ocurrido en Las Delicias (Putumayo) el 30 de agosto de 1996, donde fueron retenidos sesenta soldados del ejército. Las declaraciones del dirigente guerrillero YESID ARTETA, aparentemente mostrarían cómo para las FARC no habría una relación directa entre la dimensión política de las marchas y las acciones militares de la guerrilla. Sin embargo, pensamos que la articulación estaría dada en la medida en que la población, por la experiencia de la represión sufrida durante las marchas y por el despliegue de poder de la guerrilla, tiende a darle un mayor reconocimiento al poder militar y a la autoridad de las FARC, características y reconocimientos que no podemos desconectar de los triunfos militares que se sucedieron después de las marchas.

En el Caguán sí fue un año casi de trabajo. Para poder hacer esas marchas, prácticamente fue un trabajo diario con cada una de las veredas, realizando balances, recolección de los dineros y preparando toda la infraestructura. Eso duró casi seis meses y claro, hubo un trabajo de concientización y a la gente se le explicó el efecto de las fumigaciones. Se entendía que era la defensa por la subsistencia. A la gente se le explicó y adquirió conciencia que las fumigaciones les podían truncar todo su proyecto económico.

Hay gente que prácticamente tenía todas sus inversiones en esa región del Caguán. Nosotros de alguna manera jugamos el papel catalizador de esas marchas, le hacíamos ver a la población campesina que en gran medida estaba en peligro todo el proyecto económico de esa región. Eran las perspectivas económicas de esa región. Nosotros sabíamos que si la gente había metido los cultivos de coca como medida extrema para tener un nivel medio de subsistencia en esas regiones, con esas fumigaciones iban a tener unas implicaciones y de hecho eso fue así.

Lo que pasa es que nosotros no podemos quitarle el papel dirigente, el papel de vanguardia que tiene el movimiento guerrillero en esa zona. La guerrilla no la podemos separar del contexto de toda la problemática de esa región, de hecho el movimiento guerrillero es una vanguardia política y es una organización dirigente, es una organización que proyecta, que traza planes, que compromete a la población dentro de sus luchas. El movimiento armado tiene una visión mucho más esclarecida de la problemática, cómo reaccionar y cómo organizar la respuesta popular frente a ese tipo de situaciones. Nunca podemos decir que el movimiento guerrillero no tuvo nada que ver con las marchas. Claro que tuvo que ver, el movimiento guerrillero estuvo y jugó un papel preponderante y justamente es el papel que nosotros hemos reclamado. El papel de defensa, el papel de orientador y el papel de organizador de esas poblaciones.

Si bien es cierto que el movimiento trazó unas orientaciones muy generales, todo el soporte organizativo, lo que fue el manejo y las negociaciones, fueron exclusivamente de la dirigencia campesina²⁵.

Nosotros sabíamos que una acción militar la teníamos que repeler militarmente. Es decir, nosotros no podemos, y mal haríamos en poner a la población civil como un escudo para una operación de carácter militar, a sabiendas de que eso no ha servido nunca en este país.

En Colombia las operaciones militares cuando han sido diseñadas han pasado por encima de la cabeza de todo el mundo. El retiro de la fuerza pública y el retiro de las Fuerzas Armadas en una determinada región nunca ha sido un compromiso del gobierno con la comunidad, sino que ha sido el producto del mismo desenlace de la confrontación militar. Y una prueba de esa situación, es que pese a la capacidad de movilización que hubo, a la cantidad de gente comprometida en esas movilizaciones, y a lo que eso significó a través del debate político y militar de este país, la 'Operación Conquista' continuó y la presencia militar antes que disminuir se multiplicó en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Guaviare. Lo que se demostró posteriormente es que si el ejército salió de esa región, fue como resultado de las operaciones militares que allí se realizaron. La liquidación de un batallón de contraguerrillas hizo cambiar un poco la correlación de fuerzas en esa región.

Después del ataque de la unidad militar del Billar, prácticamente las unidades militares que se encontraban diseminadas en diferentes regiones del Caguán fueron retiradas desde el mismo Remolinos del Caguán, que era el centro de todo el despliegue de la operación de la región del Caguán. Pero la motivación fundamental de las marchas fue más que todo por las implicaciones que eso tenía para la economía de esa región²⁶.

Una de las pruebas del papel protagónico e incluso autoritario de las FARC en la promoción y el desarrollo de las marchas cocaleras, es que una vez finalizadas, no derivaron en la construcción de organizaciones de cultivadores de hoja de coca. Sin embargo, la experiencia sufrida por varios marchantes sí sirvió para la ampliación del reclutamiento de combatientes por parte de la guerrilla.

En las marchas campesinas de hace dos años, ustedes recuerdan que aquí la confrontación con el ejército fue muy dura. Esa experiencia contribuyó a que muchos de los campesinos que estuvieron en las marchas, la gente que no tiene

25 Las entrevistas a líderes campesinos que participaron en las negociaciones, disienten de esta apreciación. Para ellos, la intervención de las FARC durante las negociaciones fue permanente. Entrevista a RAÚL DONCEL y JOSÉ ÁNGEL LAMILLA, miembros de la comisión negociadora por parte de los marchistas.

26 Entrevista a YESID ARTETA, comandante de las FARC, Cárcel Modelo, Bogotá, 1999.

propiedades, jornaleros, los raspachines también, mucha de la gente que estuvo en las marchas campesinas, que estuvo en la pelea, que vio caer muertos, que vio caer gente herida, que vio caer a su familia, quedaron después de las marchas campesinas prácticamente en la nada. Ha habido un ingreso masivo a las filas de la guerrilla, sin poder comprobar datos oficiales, pero eso se lo cuentan a uno los campesinos, uno lo ha visto, cuando uno va a una región uno se da cuenta, se fueron diez, quince de esta vereda, porque la gente experimentó el duro enfrentamiento con la fuerza pública. Mientras los campesinos estaban armados con palos y machetes en las marchas, porque no tenían más nada, el ejército los agredió y eso salió a nivel nacional e internacional.

Mucha gente vio que todos los acuerdos a los que se llegó con el gobierno, éste los incumplió en más del 60%. Lo que se logró negociar no contribuyó a un desarrollo de lo técnico y antes por el contrario, lo que se pedía en las marchas que era la no fumigación y un proceso de concertación de desmonte por la vía manual, culminó en la fumigación masiva. Entonces obviamente mucha gente quedó en la olla, en la calle y unos optaron por la guerrilla, otros se habrán ido con los paramilitares. Pero que eso contribuyó al crecimiento (de la guerrilla) en estos dos años, eso es verdad²⁷.

El poder intimidatorio de la guerrilla fue sin duda el eje alrededor del cual giraron la movilización y negociación entre los delegados de los marchistas y los representantes del gobierno. Una vez más quedó demostrado que cuando la guerrilla decide movilizar la población civil, lo logra, no importa cual sea el costo.

Las Fuerzas Armadas y el gobierno

Durante las marchas y las negociaciones se dieron diferencias de criterios entre las Fuerzas Armadas y el gobierno. Mientras para el gobierno, los negociadores de los campesinos cultivadores estaban en la mesa al mismo nivel que los demás participantes, para el ejército, éstos eran narcotraficantes²⁸. El gobierno a su vez se debatía en la necesidad de demostrarle al mundo su empeño en la lucha contra el narcotráfico, dada la vinculación que el gobierno de Estados Unidos hacía entre la administración del entonces presidente ERNESTO SAMPER, y uno de los principales carteles del narcotráfico²⁹.

El ejército colombiano con la llamada “Operación Conquista” buscaba atacar los cultivos ilícitos y la economía del narcotráfico en el sur del país con el fin de

27 Entrevista a OCTAVIO COLLAZOS, líder de la izquierda política en el Caquetá.

28 Revista *Semana*, agosto 27 - septiembre 3 de 1993.

29 La campaña del presidente ERNESTO SAMPER (1994) fue acusada por recibir seis millones de dólares por parte del cartel de Cali.

debilitar la principal fuente de recursos de las FARC. Para esto buscó controlar el acceso de insumos para la transformación de la hoja de coca: cemento, gasolina y químicos; y desplazar poblaciones altamente ligadas a esta economía ilícita y bajo control político-militar de la guerrilla. En palabras del general BEDOYA: “*salvar la selva*”³⁰. La posición de este general del ejército frente a los negociadores de las marchas se refleja en esta cita: “en el documento (Acta de Acuerdo), son igualados los líderes del paro con el gobierno. Hablan de negociaciones cuando eso es muy difícil de hacer con esa gente porque estamos hablando de narcotraficantes”³¹. Según el comandante BEDOYA entre los manifestantes “*había presencia de personajes muy raros con vínculos con los grupos subversivos*”³².

Para algunos analistas³³, el ejército también necesitaba vincularse más activamente en la lucha contra el narcotráfico pues hasta ese momento la policía había sido el principal protagonista de la lucha antidrogas y por lo tanto, el gran beneficiario del apoyo político y financiero de los Estados Unidos. El general BEDOYA, comandante del ejército en ese momento, y algunos de sus inmediatos seguidores como el general RAMÍREZ han sido los principales ideólogos del concepto de narcoguerrilla, como queda explícito en el testimonio dado por uno de los líderes de las marchas:

El general (se refiere al general NÉSTOR RAMÍREZ) lo que nos decía de entrada era que nosotros éramos unos testaferros de la guerrilla, éramos unos alcahuetes, que lo único que nos faltaba para identificarnos plenamente como narcoterroristas, como narcoguerrilleros, era el fusil. Que no éramos ningunos campesinos, que no éramos ningunos ingenuos frente a este asunto de las perversas intenciones de la guerrilla, como decía él³⁴.

La mejor forma de obtener recursos de los Estados Unidos para las operaciones del ejército, consistía en establecer un vínculo estrecho entre la lucha antidrogas y la lucha antisubversiva.

Con relación al gobierno nacional, hay antecedentes que demuestran su incapacidad y falta de voluntad política frente al problema de los cultivadores de

30 Revista *Semana*, agosto 6-13/96, pág. 19. *Cambio 16*, agosto 5-12/96, pág. 18.

31 Revista *Semana*, agosto 27-sept. 3/96, págs. 33-36. En otra declaración, el general BEDOYA afirmó que una vez que se arrancaran y se acabaran los cultivos, se miraba qué se hacía con los campesinos (*El Tiempo*, agosto 18/96, pág. 16^a).

32 *Ibíd.*

33 Entrevista con ANDRÉS DÁVILA, experto en historia de las Fuerzas Armadas de Colombia.

34 Entrevista a RAÚL DONCEL, líder y negociador de las Marchas en el Caquetá. Para BEDOYA había guerrilleros infiltrados en las marchas disparando con armas cortas (*El Colombiano*, agosto 31/1996 pág. 7^a).

coca en el Caquetá. El primero, es el fracaso del llamado “Plan de Desarrollo para el Medio y Bajo Cagúan y Zuncillas” de 1985. Este plan de sustitución gradual de los cultivos de hoja de coca es fruto del acuerdo entre comunidades, FARC y algunas instituciones gubernamentales en el marco de las negociaciones del gobierno del presidente BETANCUR (1982-1986) con las FARC (INCORA, 1986). El recrudecimiento de la guerra trunca un proceso de concertación sin precedentes en la región. Posteriormente, en 1991, después de la movilización a Florencia los campesinos logran la adjudicación de cuatro millones de dólares de los cuales sólo se entregan 593 millones de pesos para desarrollo de cultivos lícitos (LAMILLA, 1999). Más adelante y como lo señala un líder campesino:

En enero de 1995, una comisión de seis campesinos voceros de las comunidades del Bajo Cagúan viajan a Bogotá, en esa ocasión acuerdan con el gobierno no sembrar más coca a cambio de proyectos de desarrollo alternativo y así ir desmontando los cultivos ilícitos. Las comunidades cumplieron en un 90% y se quedaron esperando del gobierno los programas diseñados y ampliamente anunciados por todos los medios de comunicación. Nuevamente el gobierno incumple los pactos suscritos con los campesinos cultivadores de la hoja de coca (LAMILLA, 1999: 678).

Son estos hechos lo que muestran lo que hemos denominado el proyecto de “no-ciudadanía”, que sería el proyecto por omisión de los gobiernos nacionales de las últimas décadas.

En el nivel de los gobiernos regionales de los últimos años, es importante rescatar que éstos se han opuesto a las fumigaciones pero sus posiciones no han sido respaldadas por las instancias nacionales. De hecho, la posición de la gobernadora del Caquetá, AMPARO OSSA, durante las marchas, fue contraria a las fumigaciones y a la intervención militar. La gobernadora era consciente que en tanto no se lograran algunas condiciones para el desarrollo departamental difícilmente se acabarían los cultivos de coca. Según ella, en las negociaciones se trataba “de lograr la financiación necesaria para devolverle al Caquetá lo que le han negado en desarrollo durante tantos años” (URIBE, 1997: 15). El actual gobernador ANTONIO SERRANO, también discrepa del gobierno nacional con relación al tema de las fumigaciones por los efectos sociales que conllevan:

¿Qué es la fumigación? más o menos la política del Estado es fumigar, no importa qué pase, fumigar es acabar con la coca “supuestamente”, pero un argumento en contra de la fumigación es que las plantaciones de coca han aumentado. Si el gobierno fumiga 20.000 se siembran 25.000, más de las que se fumigan, o sea que no ha dado resultado la política de la fumigación, porque si se hubiera logrado erradicar en alguna parte los cultivos ilícitos, bueno está dando resultado, pero hay más hectáreas de coca que antes de fumigar, porque a veces sucede que se fumiga una plantación y la gente se mete hacia el interior de la selva,

entonces se va degradando más, y ese es para mí el principal problema con esto de las fumigaciones. Vamos a hacer una propuesta que sea viable, la solicitud que hemos hecho en primera instancia, que es urgente, es la de “no fumigación” a los cultivos de menor extensión. Mientras sigue el debate y subsiste la polémica sobre la fumigación, nosotros hablamos de los cultivos de subsistencia o cultivos campesinos o cultivos de menor extensión. Para nosotros el problema grande son los desplazamientos de estas familias campesinas, entonces el que tiene dos, tres hectáreas, realmente no tiene mentalidad de narcotraficante, ni saben cuál es el destino de este producto, para ellos es un medio de subsistencia, pues no hay otro para mantenerse y saben que salen cada dos, tres meses con su mochilita, y se la pagan en el caserío más cercano y en efectivo, lo llevan allí en un morralito y no es más. Al fumigar es difícil que el veneno caiga en la coca, porque generalmente ellos tienen sus plantaciones de plátano, de yuca, lo de ellos, porque tampoco es que comercialicen, pues valdría más el flete que el producto. Cuando una familia hace su asentamiento en una región selvática siempre lo hace cerca de una fuente de agua, entonces al fumigar ellos quedan sin nada. No sólo se erradica la coca sino también los cultivos lícitos y por ejemplo, en este momento hay denuncias por 1.477 hectáreas de cultivos lícitos fumigadas para un departamento como el Caquetá, fuera de las que no se han denunciado, porque la mayoría no se han denunciado³⁵.

Conclusiones

Si bien la protesta contra las fumigaciones, detonante que utilizan las FARC para la movilización, unifica diferentes intereses de los actores que participan en las marchas, los énfasis son muy diferentes. Para la guerrilla, las marchas se enmarcan prioritariamente dentro del desarrollo de su proyecto político-militar y no tanto en la protesta contra la fumigación. Para los campesinos, la mayor preocupación sí está en evitar la fumigación de los cultivos de coca, su fuente de sobrevivencia. Para los narcotraficantes, la fumigación más que un problema político o de subsistencia, es una interferencia a la posibilidad de realizar sus negocios.

En el supuesto de la existencia de voluntad política por parte del gobierno nacional para llegar a acuerdos con los campesinos cultivadores tendientes a solucionar las causas estructurales de los cultivos ilícitos, esto no hubiera sido posible por la interferencia de intereses de los otros dos actores en juego. Por un lado, los narcotraficantes, cuyo proyecto fundamental era y es el de mantener y reproducir la economía ilícita, base de su enriquecimiento. Por otro lado las FARC, cuyo proyecto tiende a la toma del poder y a reformas estructurales. Lo cual es muy distinto a que éstas sean realizadas por el Estado, ya que esto legitimaría las actuales

35 Entrevista a ANTONIO SERRANO, gobernador del Caquetá (1997-2000).

instituciones ante la población y por lo tanto, implicaría la pérdida de espacio político para la organización armada.

Otro elemento que contribuyó a hacer aun más compleja la posibilidad de llegar a algunos acuerdos, fue que entre los negociadores además de darse intereses particulares, se cruzaron dos proyectos incompatibles, el de *ciudadanía* y el de *alterciudadanía*, en la medida en que algunos iban como voceros de los marchistas y otros como intermediarios de las FARC.

Como los resultados de las negociaciones de las marchas fueron más coyunturales que estructurales, la condición de marginamiento de los cocaleros se mantiene, así como el no reconocimiento de ciudadanía. El paro se levanta sin mayores logros, queda constituida una mesa de seguimiento de los “acuerdos”, que después de un año es renovada casi en su totalidad y dividida por las tensiones internas. En la actualidad, la mesa ha quedado reducida a una persona y a un documento que presenta una alternativa a la sustitución de los cultivos de coca. Sin embargo, el hecho en sí, lo que significó de sufrimiento para los marchistas, las muertes y el temor a nuevos paros, permanecen aún en la memoria colectiva de la población.

En síntesis, los campesinos cocaleros se mantienen por fuera de la ley (*desciudadanía*), después de mucho tiempo de ser excluidos (*no-ciudadanía*), aunque algunas organizaciones conservan el interés de incorporarse a la sociedad y al estado (*ciudadanía*), en medio de la presión de la guerrilla por involucrarlos en un proyecto revolucionario (*alterciudadanía*).

Con relación al problema de la emancipación, pensamos que es importante no confundir en el análisis social el “deber ser” con el “ser”. Quisiéramos ver movimientos sociales organizados y autónomos con identidad y representando proyectos colectivos de emancipación social. La coautora de este texto lleva 25 años trabajando desde la promoción social, contribuyendo y tratando de que lo anterior sea una realidad en el departamento del Caquetá. Pero los hechos son tozudos y nos muestran una sociedad civil regional bloqueada por la dinámica de la guerra que se vive en Colombia. En el Caquetá hay un bloqueo provocado por la intensificación de la guerra que dificulta enormemente la expresión autónoma de los movimientos populares y sobre todo los de base rural. El protagonismo de los colonos fundadores ha sido suplantado por actores más fuertes. Los campesinos con proyectos alternativos se encuentran atenazados entre los actores armados y los partidos tradicionales.

La emancipación social en contextos de guerra irregular se dificulta porque precisamente en este tipo de conflictos hay en disputa varios proyectos de Estado sobre un mismo territorio. ¿Es contra cuál de esos Estados o cuasi-estados que se plantea la emancipación? ¿Contra todos al tiempo? ¿Contra el uno y después contra el otro? ¿Contra opresiones específicas de cada uno de ellos? ¿Contra la domina-

ción y la explotación de uno y contra el autoritarismo militarista del otro? ¿Cómo rebelarse con base en alianzas si cuando se hacen con uno se corre el peligro de ser duramente reprimido por el otro? Y en ese caso, ¿defender la vida puede ser considerado como una forma de emancipación?

No será que, dadas las condiciones, lo más inteligente, por parte de los que son conscientes de la necesidad de la emancipación, es, precisamente, no hacerse visibles. Es decir, no hacer de la resistencia una acción colectiva organizada y resistir paciente y calladamente a todos los actores dominantes. Muchos de ellos salieron a las marchas para no contrariar a la guerrilla y con la esperanza de que dejaran de fumigar los cultivos. Sin embargo, el Estado no dejó de fumigar y aun así siguieron sembrando en otros lugares. Por su lado, la guerrilla quería otras marchas y muchos campesinos dijeron que primero muertos antes que salir de nuevo. Al parecer, estos campesinos-colonos cocaleros con potencial emancipatorio, esperan mejores momentos y resisten los embates de la guerra y de sus protagonistas como mejor pueden a nivel individual, familiar y de pequeños grupos. Sin embargo, lo que cada uno hace va sumando y se genera así un fenómeno social de resistencia así ésta no sea organizada o dirigida. Esto ameritaría una investigación centrada en resistencias cotidianas al estilo de los trabajos de James Scott³⁶, pero en este caso dirigidas a resistir la lógica autoritaria de los actores armados. De hecho, cinco años más tarde (2001), encontramos una situación aun más compleja en la medida que se ha ido desarrollando el poder de un nuevo actor armado en la zona: los paramilitares. Tal presencia agrava la situación de bloqueo a las formas emancipatorias pero a la vez amplía el espectro de las resistencias cotidianas.

Bibliografía

Libros, artículos y ponencias

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CAQUETÁ. Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. *"Muerte y tortura en el Caquetá 1979-1981"*. Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, Bogotá, 1982.

ESCOBAR, CRISTINA. *Trayectoria de la ANUC*, CINEP, Colección Agraria, 1982.

FAJARDO, DARÍO. "La colonización de la frontera agraria colombiana". En *El agro y la cuestión social. Minagricultura 80 años*. Tercer Mundo Editores. Banco Ganadero. Caja Agraria. VECOL, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1994.

36 SCOTT, JAMES. 1976. *The moral economy of the peasants*. New Haven: Yale University o *Weapons of the Weak: Of the Everyday Forms of Peasant Resistance* New Haven: Yale University Press, 1985.

- FERRO, JUAN GUILLERMO; URIBE, GRACIELA; OSORIO, FLOR EDILMA; CASTILLO, OLGA LUCÍA. *Jóvenes, coca y amapola: Un estudio sobre las transformaciones socioculturales en zonas de cultivos ilícitos*, IER, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Javegraf, 1999.
- INCORA, (1973), "*Plan de desarrollo del proyecto de colonización del Caquetá*". Proyecto Caquetá 1, Etapa II, vols. I, II, Bogotá, diciembre, 1973.
- LAMILLA, JOSÉ ÁNGEL. "Los cultivos ilícitos y las marchas campesinas. En *Revista Javeriana*, 659, Bogotá, Javegraf, 1999.
- OROZCO, IVÁN. "*Los diálogos con el narcotráfico: Historia de la transformación fallida de un delincuente común en un delincuente político*", *Análisis Político*, nº 11, septiembre-diciembre, Bogotá IEPRI, U.N., 1990.
- PULECIO, JORGE REINEL y PULECIO, HERMINSO. "*Proyecto Andino de Desarrollo Territorial Amazónico*". Segundo Informe de Avance, Bogotá, Fundación Friedrih Ebert de Colombia. FESCOL, Bogotá, 1999.
- RAMÍREZ, MARÍA CLEMENCIA, "La política del reconocimiento y la ciudadanía en el Putumayo y la Baja Bota Cauca: el caso del movimiento cocalero de 1996". En Proyecto "*La reinención de la emancipación social*", CES/ MacArthur, Coimbra, 2000.
- SCOTT, JAMES. *The moral economy of the peasants*. New Haven: Yale University. 1976.
- SCOTT, JAMES. Scott, James. *Weapons of the Weak: Of the Everyday Forms of Peasant Resistance* New Haven: Yale University Press. 1985.
- URIBE RAMÓN, GRACIELA. "Caquetá, contexto y dinámica de las marchas campesinas". En *Coloquio. Revista de la Dirección Nacional de Estupefacientes*, año 5, nº 3, Bogotá, 1997.
- URIBE RAMÓN, GRACIELA. Uribe, Graciela. *Veníamos con una manotada de ambiciones. Un aporte a la historia de la colonización del Caquetá*, Segunda edición, Bogotá, UNIBIBLOS. 1998.
- URIBE, GRACIELA y FERRO, JUAN GUILLERMO. "*Las FARC: Organización, política y región*". Informe final de investigación presentado a COLCIENCIAS, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1999.

Documentos

“Pliego de peticiones de la marcha campesina, indígena y comunal del Caquetá, presentado al gobierno nacional y regional para negociar la suspensión de la presente marcha”, agosto de 1996, Florencia, Caquetá.

“Legalizar el consumo de la droga: única alternativa seria para eliminar el narcotráfico”. Secretariado del Estado Mayor Central FARC-EP montañas de Colombia, marzo 29 del año 2000.